

Política, razón y desarrollo más allá de Corral Quemado

(Javier Arellano Yanguas; 2 de Septiembre 2008)

Cualquiera que conozca la historia del pueblo awajun-wampis, sus anhelos y sus luchas, no se habrá sorprendido de la determinación que los nativos mostraron en el paro del pasado Agosto. Por el contrario, habrá quedado perplejo con la reacción gubernamental y los análisis de algunos medios de comunicación.

Durante los días que duró la movilización el Gobierno acusó a los nativos de estar politizados y manipulados por asesores y ONGs; actuar de manera irracional, desconociendo sus propios intereses; y, finalmente, de dar la espalda a la modernidad y el desarrollo. El análisis de esas tres afirmaciones me sirve para poner de manifiesto tanto las razones que impulsaron la movilización, como algunos de los prejuicios que ciegan al Gobierno. Finalmente, aportaré mi opinión sobre el potencial y los riesgos que esta movilización tienen para el futuro de los pueblos amazónicos.

Política en los márgenes del Estado

La acusación de politización lanzada por el Premier, algunos ministros y destacados voceros del APRA contra los dirigentes nativos es realmente desconcertante. ¿Cómo es posible que personas cuya principal actividad es la política acusen a los nativos de hacer política? ¿Qué tiene de malo hacer política?

Por desgracia, desde hace un par de décadas, en algunos sectores de la sociedad peruana se ha instalado idea de que la organización de la convivencia y la promoción del desarrollo por parte del Estado son cuestiones puramente técnicas. Por lo tanto, se requerirían buenos gestores que sin contagiarse de influencias políticas ejecuten las medidas adecuadas. Alan García se ha adherido con fanatismo de converso a esa visión. Tuvo que aprender las soluciones técnicas porque su primer gobierno fue un desastre. Así que ahora que supuestamente él sabe cómo hacer las cosas, los que le llevan la contraria o están equivocados o actúan de mala fe.

Pero los nativos no están convencidos de la bondad de las recetas impuestas y han decidido hacer política de la única manera en la que el Estado se lo permite: tomando el espacio público.

La población nativa de la amazonía ha sido tradicionalmente relegada. Su lejanía de Lima y la dificultad de acceso a sus territorios son claves para explicar tanto su supervivencia como su abandono por parte del Estado. Las elites políticas limeñas sólo se han interesado por la selva cuando han imaginado que podrían hacer un buen negocio: oro en la colonia, caucho a principio del siglo XX, despensa del Perú con Belaunde, petróleo, minerales y madera ahora. El gran sueño limeño considera la selva un gran espacio vacío, enteramente a su disposición. Los nativos o no existen o son considerados una molestia. Así que la población amazónica experimenta al Estado Peruano bajo dos categorías no muy positivas: ausente o expoliador.

Además, la población nativa nunca ha estado políticamente representada en las instituciones del Estado. El relativamente pequeño tamaño de su población y su dispersión en varios departamentos “mestizos”, les impide alcanzar representación parlamentaria.

El resultado es una justificada desconfianza. La promulgación de los DL 1015 y 1073 no hace sino profundizar ese sentimiento. Mucho más cuando el Gobierno trata con desdén paternalista las legítimas preocupaciones de los pueblos amazónicos. ¿Qué otra cosa podían hacer los nativos para que les tuvieran en consideración? La experiencia dice que nada.

Las razones que el Gobierno desprecia

El Gobierno también ha acusado a los nativos de atrincherarse en posiciones que van en contra de sus propios intereses. Sin embargo es el propio Gobierno el que demuestra incapacidad para entender la forma de pensar de los nativos. En los artículos publicados durante estas últimas semanas se ha hablado de las razones culturales que impulsan a los nativos: la existencia de los pueblos amazónicos está intrínsecamente ligada a su relación con la tierra. El control de un territorio es su constitución política. Sin embargo, no se ha resaltado suficientemente la sabiduría económica y política que está detrás de la posición indígena. Intentaré analizarla en los próximos párrafos.

En coherencia con las políticas gubernamentales, los decretos legislativos 1015 y 1073 pretenden dejar toda la responsabilidad del desarrollo en manos privadas. Sin embargo, sólo las empresas extractivas (petróleo, gas, minería y madera) están interesadas en invertir en zonas de selva. La falta de inversión del Estado en educación, servicios básicos e infraestructura hacen que sea más difícil atraer otras inversiones privadas. De ahí la importancia que el Gobierno le da a la flexibilización del mercado de tierras.

Un recorrido por las regiones donde ya se han instalado ese tipo de industrias extractivas demuestra que la actuación de las empresas y del propio Estado a menudo no es ejemplar. La compra de la licencia social a través de promesas reiteradamente incumplidas y la compra de dirigentes están muy extendidas. Cuando el Gobierno dice que algunas ONGs han financiado las protestas sociales, no tiene en cuenta que en caso de haberse dado, serían apoyos muy pequeños en comparación con el poder económico de las empresas extractivas.

En ese contexto, la posición de los grupos amazónicos pretende garantizar que la posible corrupción de algún dirigente no ponga en peligro su territorio. Si una empresa pretende entrar a trabajar tendrá que convencer a la amplia mayoría de la población. Eso da mayor poder de negociación a los nativos, permitiéndoles defender mejor sus intereses. Sin duda alguna, esto será un freno para algunas empresas. Bienvenido porque espantará a las peores, a aquellas que no interesa que estén.

No es casualidad que el pueblo awajun-wampis, uno de los que con más energía ha salido en defensa de su territorio, haya sufrido en los últimos meses los intentos de entrar en sus comunidades de una petrolera. La empresa colombiana HOCOL compró al Estado los derechos del lote 116 y firmó acuerdos con algunos dirigentes a espaldas de la mayoría de su pueblo. Perupetro, la empresa estatal encargada de la promoción de la inversión en hidrocarburos, actuó con torpeza al intentar imponer por la fuerza esos acuerdos gestados de forma ilegítima. Por lo tanto, los indígenas no se oponen por si esas cosas pudieran pasar, si no porque tienen la experiencia de que eso es lo que está pasando.

Desarrollo elegido frente al olvido y la imposición

La tercera acusación que se hace contra los nativos es la de estar en contra del desarrollo y la modernidad. Nada más lejos de la realidad. Es el Gobierno el que no tiene visión para promover verdadero desarrollo y riqueza para el país. El Gobierno no pretende hacer lo mejor, sino lo más sencillo: dejar todo en mano de la inversión privada sin identificar qué tipo de inversión es deseable, en qué condiciones y, por tanto, qué tipo de labor previa debe abordar el Estado para hacer viable esa inversión. Los prejuicios ideológicos, la incapacidad y la pereza mental llevan a aplicar la misma fórmula para todas las regiones, independientemente de los diversos contextos sociales y ecológicos. El Gobierno desconoce así las numerosas voces que proponen la promoción de la biodiversidad y la defensa del bosque amazónico como la mejor forma de desarrollo posible para estas regiones. En vez de sumarse a los intentos de otros gobiernos para hacer de la conservación de la selva un proyecto viable, se dedica a hostigar a los que deberían ser sus principales aliados en las negociaciones internacionales: las poblaciones nativas.

Los actores, la resistencia y el futuro

Finalmente es importante hacer una reflexión sobre qué supone esta movilización para el futuro de los pueblos amazónicos. En primer lugar hay que poner de manifiesto que ésta ha sido una movilización nacida de las bases. Al Gobierno suele decir que este tipo de movilizaciones son maniobras oscuras de personas interesadas en desestabilizar el país. Sin embargo, sus declaraciones tratan sólo de esconder el desconocimiento y la improvisación con la que actúa. Hay muy pocas ONGs trabajando en las zonas de selva y las que hay no se encuentran ni mucho menos entre las más importantes del país. Por otra parte, durante los últimos años las organizaciones representativas de las comunidades han sufrido una gran debilidad. En muchas ocasiones esa debilidad ha sido producto de su desconexión de las propias bases. Así que se equivoca el Gobierno si piensa que intimidando a AIDSESEP va a frenar las reivindicaciones indígenas. La lógica es la inversa. Si en esta ocasión AIDSESEP ha cumplido su papel representativo ha sido porque se ha puesto al servicio de un movimiento mucho más amplio que ha nacido desde abajo, comunidad a comunidad, en conversaciones alrededor de la hoguera. El Gobierno no va a poder parar ese movimiento y más bien le conviene mantener abiertos cauces de diálogo a través de las organizaciones indígenas. Atacarlas y tratar de desacreditarlas no es la actitud más inteligente para solucionar los problemas reales.

Por último, la fuerza que han mostrado en esta ocasión las bases no debería llevar a diagnósticos equivocados sobre la fortaleza del movimiento indígena. Sería demasiado atrevido decir que la movilización indígena supone el nacimiento de una fuerza política que puede jugar un papel a nivel nacional. Es más, creo que en este momento ese protagonismo sería perjudicial para los grupos amazónicos. La mayoría de ellos están pasando por procesos de cambio cultural y político muy profundos. Estos cambios les obligan a pensar cómo se adaptan de manera creativa a las nuevas situaciones: qué es fundamental y qué es accesorio para su vida, cómo articular la modernidad y la tradición, qué tipo de liderazgos y relaciones con el resto del mundo quieren construir. Eso requiere tiempo y calma. El Gobierno los ha puesto en una mala situación para abordar ese proceso. Es cierto que el conflicto les ha hecho recuperar la capacidad de movilización. En ese sentido su lucha es una señal de que siguen vivos y dispuestos a pelear por su existencia como pueblo. Sin embargo, la dinámica de resistencia les hace repetir los mecanismos históricos de defensa. Tienen que invertir sus energías en esa defensa y se retrasa el abordaje de la crisis interna que los debe lanzar hacia el futuro.

Por lo tanto, el Gobierno es doblemente torpe y doblemente culpable. Doblemente torpe por desconocer la realidad de los pueblos indígenas y retrasar con su actuación la modernización que dice pretende promover. Culpable porque además de haberlos olvidado históricamente está dificultando su futuro. Quizá la solución sea que el Gobierno se anime a transitar la carretera que hay más allá del puente de Corral Quemado, a ras de tierra y agua. Definitivamente, los viajes en helicóptero son un gran impedimento para hacer política de la buena y para promover el desarrollo. Desde arriba todo y todos parecen pequeños y manejables...